Señor(es)

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ**

judicial@movilidadbogota.gov.co

contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

agendamientovirtual@movilidadbogota.gov.co

**Ref.: Derecho de Petición.**

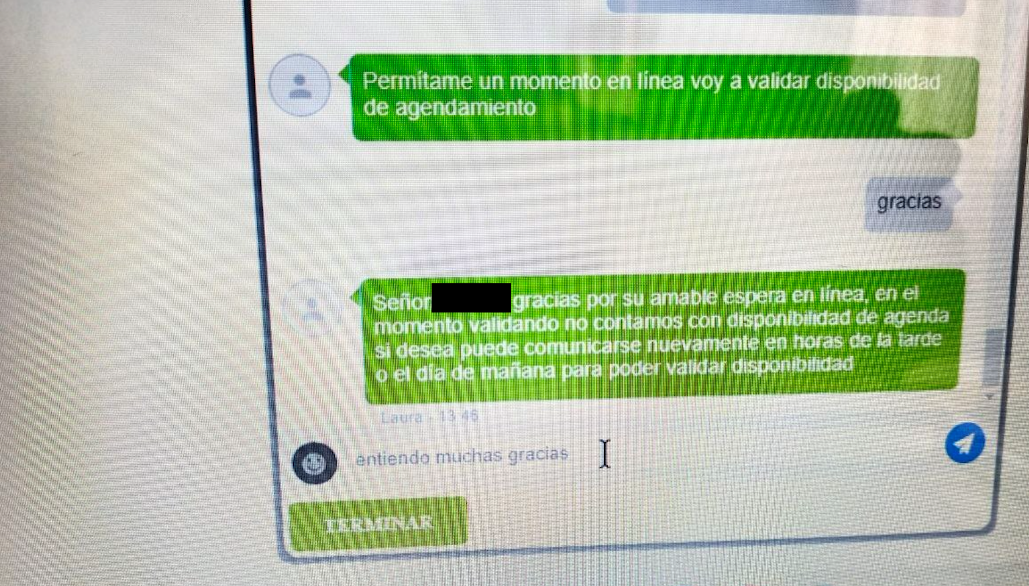
{% if client\_type == ‘Persona Natural’ %}**{{ natural.name|upper }}**, quien se identifica con {{ complaining\_type\_id }} No. {{ complaining\_id\_number }}{% else %}**{{ legal.name|upper** }}**, sociedad debidamente constituida e identificada con Nit. {{ complaining\_id\_number }}, representada por {{ legal\_representative\_name|title }} quien se identifica con {{ legal\_representative\_type\_id }} No. {{ legal\_representative\_id\_number }}**{% endif %} **con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las demás normas concordantes que lo regulan y desarrollan, presento ante ustedes el presente derecho de petición.**

**SOLICITUD**

1. Se me AGENDE cita de impugnación para la orden de comparendo No. **{{ fotomulta\_number }},** cita que deberá asignárseme lo antes posible.
2. Se me EXPLIQUEN las razones por las cuales y basados en que normatividad legal, la Secretaría Distrital de Movilidad decide unilateralmente coartar mi derecho a la defensa impidiéndome el acceso a la justicia para poder controvertir todos los comparendos que la entidad decide imponerme sin cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-038 del 06 de febrero de 2020 pues en ningún caso identificó quien iba conduciendo.
3. Informe cómo su entidad garantiza el debido proceso cuando en los medios dispuestos para agendar la audiencia de impugnación informa que NO cuenta con disponibilidad.

**HECHOS**

1. Que me fue impuesto el fotocomparendo No. {{ fotomulta\_number }}.
2. Que la entidad menciona que los medios para agendar una audiencia se encuentra el chat, así como la llamada a través de la plataforma de la entidad.
3. Que una vez tuve conocimiento de la existencia del comparendo No. {{ fotomulta\_number }}, y con el fin de **ejercer el derecho al DEBIDO PROCESO, de defensa y contradicción**, procedí a tratar de realizar **el agendamiento.**
4. Que al usar el chat como medio para el agendamiento de la audiencia de impugnación, su entidad en ocasiones se niega a asignar cita como se demuestra a continuación.



1. Que si bien existen ocasiones en las cuales es viable agendar una audiencia por medio del chat o de la llamada**, en ocasiones no la agendan por una supuesta falta de disponibilidad. Lo cual vulnera mi derecho fundamental al debido proceso pues a través de los medios dispuestos por la entidad no fue posible agendar la audiencia de impugnación.**
2. Que al impedirme agendar, la Secretaría Distrital de Movilidad decidió unilateralmente coartar mi derecho a la defensa impidiéndome el acceso a la justicia para poder controvertir todos los comparendos que la entidad decide imponerme sin cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-038 del 06 de febrero de 2020 pues en ningún caso identificó quien iba conduciendo.
3. Que no poder agendar mi audiencia me impide garantizar el debido proceso, ya que mientras realizo múltiples intentos, su entidad de forma automática falla en contra, declarándome contraventor sin prueba alguna.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Presento esta petición con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política, regulado y desarrollado por la Ley 1755 de 2015[[1]](#footnote-1). Esta prerrogativa constitucional faculta a los particulares para solicitar información mediante peticiones respetuosas ante autoridades públicaso particularescon el fin de obtener la satisfacción de un interés personal o colectivo. La jurisprudencia constitucional ha destacado la fundamentalidad de este derecho al considerar que es: (i) determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa[[2]](#footnote-2) y (ii) tiene un nexo directo con otras garantías fundamentales como lo es el acceso a la información[[3]](#footnote-3). Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

*“Este derecho fundamental tiene nexo directo con el derecho de acceso a la información (artículo 74 CP), en la medida que los ciudadanos en ejercicio del derecho de petición, tienen la potestad de conocer la información sobre el proceder de las autoridades y/o particulares, de acuerdo a los parámetros establecidos por el legislador (….). [E]l derecho de petición es el género y el derecho a acceder a la información pública es una manifestación específica del mismo”[[4]](#footnote-4).*

Con ese criterio, la Ley 1755 de 2015 y la jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición es la resolución pronta y oportuna de la cuestión. En otras palabras, que el solicitante tenga la posibilidad cierta y efectiva de que su petición sea resuelta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y, dentro del término estipulado por la ley. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha manifestado que:

*“[L]a voluntad del Constituyente de incluir el derecho de petición dentro del capítulo de la Carta Política conocido como “de los derechos fundamentales” no fue otra que garantizar, de manera expresa, a los gobernados la resolución pronta y oportuna de la cuestión que les atañe, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”[[5]](#footnote-5).*

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente derecho de petición se presenta ante una entidad pública, conviene destacar que en **Sentencias T-377 de 2000**[[6]](#footnote-6), **C-818 de 2011 y C-951 de 2014**[[7]](#footnote-7)la Corte Constitucional advirtió que, en virtud de los principios y fines del Estado, cualquier persona interesada tiene la posibilidad de elevar solicitudes ante cualquier autoridad pública incluyendo las autoridades judiciales[[8]](#footnote-8) sin que estas puedan negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas. Incluso, la falta de competencia de la entidad ante quien se presenta la acción constitucional no la exonera del deber de responder[[9]](#footnote-9).

En desarrollo de tal mandato, queda claro que elevar solicitudes a las autoridades públicas es un verdadero derecho fundamental, que es de carácter imprescindible para el efectivo logro de los fines del Estado consagrados en la Constitución Política. Justamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado:

*“[S]e trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas*”[[10]](#footnote-10).

Conforme a tales antecedentes, presento el derecho de petición de la referencia con el fin de que responda de manera clara, precisa, oportuna, de fondo y congruente lo aquí solicitado, atendiendo las obligaciones constitucionales que derivan de este derecho fundamental.

La respuesta la recibiré al correo electrónico:

* {{ ouremail }}

No obstante lo anterior, se aclara que esta dirección es solo para recibir la respuesta a este derecho de petición y por lo tanto no autorizo ninguna notificación judicial o administrativa.

Atentamente,

{{ Signature }}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

{%p if client\_type == ‘Persona Natural’ %}

**{{ natural.name|upper () }}**

{{ complaining\_type\_id }} No. {{ complaining\_id\_number }}

{%p else %}

{{ legal\_representative\_name|title }}

**Representante Legal**

**{{ legal.name|upper () }}**

{%p endif %}

1. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Constitucional T-377 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-054 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-149 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-077 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Constitucional. Sentencias C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-487 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Constitucional. Sentencias T-377 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-274 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Constitucional. Sentencia T-998 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería. [↑](#footnote-ref-5)
6. M.P. Alejandro Martínez Caballero. [↑](#footnote-ref-6)
7. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Constitucional Sentencias T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-394 de 2018 M.P. Diana Fajardo Rivera. La jurisprudencia ha sido clara en resaltar que se deberán entender peticiones del artículo 23 de la Carta Política aquellas solicitudes ajenas al contenido mismo de la *litis* e impulsos procesales. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corte Constitucional. Sentencias T-476 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-464 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T- 077 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte Constitucional. Sentencia T-279 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [↑](#footnote-ref-10)